

SARAH STEEN

# Raíces de la rebelión en Chiapas

*Hace cinco años, con el Año Nuevo de 1994, los zapatistas irrumpieron súbitamente en la escena internacional ocupando San Cristóbal de las Casas y otras cinco poblaciones de Chiapas. Los enmascarados rebeldes indígenas acapararon la atención para hacer llegar sus demandas y agravios a una amplia audiencia. En la rebelión zapatista han sido muchos los papeles y muchos los participantes, con una trama tan densa y entretejida que la solución parece a veces imposible. Hoy, con la reciente disolución de los comités de mediación, las negociaciones empantanadas, la escalada militar y las extensas operaciones de los grupos paramilitares, se abren muchas incógnitas de difícil resolución.*

A primeras horas del 1 de enero de 1994, mientras los funcionarios del Gobierno celebraban en Ciudad de México y en Washington D.C. la puesta en marcha del NAFTA (Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se apoderó en Chiapas, México, de seis municipios, se rebeló contra el Gobierno y proclamó su declaración de agravios. En la declaración, este grupo armado de indígenas y campesinos mejicanos pedía a los ciudadanos mexicanos y a todos los grupos marginados del mundo que reconocieran el fracaso del Estado al no haber logrado la justicia social, y que pusieran en duda las estrategias y promesas del Gobierno en relación con el desarrollo económico, con el fin de reivindicar el lugar que les corresponde a los indígenas y campesinos en la historia.

Aprovechando la celebración de la fiesta de Año Nuevo para coger desprevenidos al Gobierno y a las fuerzas de seguridad, los zapatistas lanzaron una ofensiva militar, y ocuparon los ayuntamientos de Ocosingo, Huistán, Chanal, Altamirano, Las Margaritas, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas. Dividieron sus filas; enviaron a parte de sus seguidores a quemar los registros oficiales, mientras que otros marcharon a las montañas para reclutar gente en las comunidades indígenas y campesinas. Declararon la guerra al ejército mexicano y se dirigieron a la Cruz Roja y a otras organizaciones internacionales para que hubiera un seguimiento de la rebelión, según las convenciones de guerra de Ginebra. Lanzaron un ataque a una base militar próxima a San Cristóbal, dejando el camino despejado para liber-

Sarah Steen ha sido investigadora visitante del CIP en 1999. Actualmente prepara una doble licenciatura en Economía y Estudios Internacionales en el Kenyon College, EE UU.

Traducción:  
Mercedes Abad.

*El neoliberalismo y la globalización han entorpecido el esfuerzo realizado por campesinos e indígenas para incorporarse al mundo moderno sin renunciar a su cultura, historia y herencia.*

tar a 179 prisioneros de una cárcel cercana. Raptaron al ex gobernador de Chiapas, Absalón Castellanos Domínguez, que era enormemente impopular, amenazando con que sería fusilado por un delito de represión.<sup>1</sup>

Los comunicados zapatistas fueron transmitidos por la emisora de Ocasingo; en ellos contaban la represión a la que eran sometidos y exponían sus reivindicaciones. Declaraban que venían sufriendo esas injusticias desde la conquista del Nuevo Mundo y afirmaban: “¡Hoy decimos basta ya! Al pueblo de México: hermanos y hermanas mejicanos: somos el producto de 500 años de lucha”. Difundieron sus demandas de tierra, vivienda, alimentación, educación, libertad, democracia y justicia, basándose en los derechos que les otorgaba la Constitución de México de 1917. Según su artículo 27, el desarrollo del país debe ser equilibrado, mejorando las condiciones de vida tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Concretamente, se habla de una “distribución equitativa de la riqueza pública”.<sup>2</sup> Se aboga por la conservación de las zonas ecológicas, la división de los grandes latifundios de tipo feudal y la garantía a todas las comunidades del derecho de propiedad de las tierras de su entorno. En esencia, la Constitución de 1917 garantiza la seguridad de los pequeños productores, campesinos e indios. Pese a ello, ni en Chiapas ni en la mayor parte de México se ha puesto en ejecución esta parte de la Constitución, la ley oficial de la tierra.

Para el EZLN y las poblaciones indígenas, el problema principal, el que subyace tras las drásticas dinámicas sociales entre ricos y pobres marginados, es el proceso de globalización y el auge de las políticas neoliberales. Este reciente fenómeno de la economía —según piensan ellos y otros muchos especialistas— es culpable de la exclusión de grupos sociales que, por lo general, son los más antiguos y los que tienen mayores tradiciones y raíces históricas con la tierra que les está siendo arrebatada. El neoliberalismo y la globalización han entorpecido el esfuerzo realizado por campesinos e indígenas para incorporarse al mundo moderno sin renunciar a su cultura, historia y herencia. El neoliberalismo ignora la condición de muchas minorías étnicas y sociales pues hace que las naciones dependientes tengan menos posibilidades de actuación sobre su desarrollo. Muchos gobiernos, como el de México, desean ante todo atraer o mantener el capital extranjero que afluye a sus países y, por eso, es frecuente que descuiden la riqueza pública, no cumplan los compromisos adquiridos ni regulen los grandes negocios en una apuesta a favor de la inversión de las compañías transnacionales (TNC).<sup>3</sup> Para conseguir los mayores beneficios posibles, muchas TNC buscan oportunidades de mercado en países donde la reglamentación de su producción sea mínima.

El Gobierno de México, en respuesta a la súbita e inesperada iniciativa de los zapatistas, envió a Chiapas 12.000 soldados y equipo militar a gran escala. Las tropas, respaldadas por ataques aéreos, expulsaron al EZLN de las mesetas cen-

<sup>1</sup> George A. Collier, *¡BASTA! Land and the Zapatista Rebellion in Chiapas*, The Institute for Food and Development Policy, California, 1994, pp. 2-4.

<sup>2</sup> Andrew Reading, “Chiapas in Mexico: The Imperative of Political Reform”, *World Policy Journal*, Vol. 11, Nº 1, Primavera 1994, p. 13.

<sup>3</sup> John Cavanagh, “Controlling Transnational Corporations”, *Foreign Policy in Focus*, V. 1, nº 6, Noviembre 1996, pp. 1-3.

trales hasta aquellos lugares donde las carreteras terminan abruptamente en la selva —la selva Lacandona— y los zapatistas desaparecieron casi tan callada y misteriosamente como habían aparecido. Doce días después, las fuerzas armadas habían reconquistado las ciudades y aldeas ocupadas por los zapatistas, y el presidente Salinas de Gortari declaró el alto el fuego unilateral. Tras cinco semanas de tregua, se inició la primera ronda de negociaciones entre la gubernamental Comisión para la Paz y la Reconstrucción y el EZLN, pero fueron unas negociaciones muy poco definidas. Apenas un año después, en febrero de 1995, el Gobierno rompió el acuerdo de alto el fuego y también el proceso de paz lanzando una ofensiva militar a gran escala contra el EZLN. En marzo del mismo año, se creó la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) que unió sus esfuerzos mediadores a los de la Comisión Nacional de Mediación (CONAI) dirigida por el obispo católico Samuel Ruiz, y ambas comisiones lograron suavizar las tensiones y restaurar el proceso de negociación. La primera ronda de negociaciones concluyó el 16 de febrero de 1996 con la firma de los acuerdos de San Andrés, que garantizaban la autonomía de las comunidades indígenas para gobernar sus aldeas dentro del marco de la constitución de México.

Pero, a pesar de este acuerdo mutuo, las relaciones entre el EZLN y el Gobierno no han sido precisamente pacíficas, las negociaciones se rompieron y se agudizaron las tensiones. La posición militar se ha ido reforzando rápidamente desde 1994 y cada vez se ha recurrido más a grupos paramilitares, que son responsables de la muerte de cientos de chiapanecos, incluyendo la brutal matanza de 45 indios tzotzil del poblado de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Hoy por hoy, no parece que el conflicto vaya a solucionarse pronto. Son muchos los actores que intervienen y desde muchos ángulos distintos. La lucha continúa hoy, aunque con menor intensidad, y con una presencia militar menos acusada; las negociaciones están en punto muerto; hay profundas divisiones políticas entre las comunidades y un alto nivel de violencia.

## **La posición del Ejército Zapatista**

El siglo XX se inició en México con un conflicto turbulento, el de la revolución mejicana, y parece que va a terminar con otro conflicto turbulento entre los rebeldes zapatistas y el Gobierno. Los zapatistas continúan hoy difundiendo las reivindicaciones campesinas e indígenas de tierra, trabajo, vivienda, salud, educación, paz e independencia y para ello utilizan todos los canales y medios de comunicación posibles. Lo irónico de esas demandas es que el estado de Chiapas es el más rico en recursos naturales —agua y petróleo— de todo México, y es uno de los lugares de origen más importantes de plantas cultivadas, ocupando, como tal, el octavo puesto mundial.<sup>4</sup> Pese a ello, los habitantes de esta región están casi totalmente excluidos de los beneficios que estas ricas tierras producen. Aunque la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, es una ciudad acomodada de clase media, otras ciudades ofrecen un contraste tajante. En la población de Ocosingo (que fue ocupada

---

<sup>4</sup> Jaime Morales, "Indigenous Movements and the Fight for Land in Mexico", *INETEMAS*, Año III, Número 7, verano 1998, pp. 15-17.

por los zapatistas el día de Año Nuevo de 1994) la mitad de los hogares carece de agua corriente, cinco de cada seis carecen de sistemas sépticos, y sólo tres de cada diez tienen electricidad. Estas cifras son todavía peores en el campo.<sup>5</sup> Los zapatistas denuncian precisamente esta situación, pero su discurso no se limita a la pobreza o a la reivindicación de sus derechos y a la tierra. La rebelión zapatista rechaza de forma tajante las políticas neoliberales que están cambiando la economía mundial, y el libre mercado que ha ido reemplazando la tradición histórica de la población indígena con la tierra. El NAFTA (Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio), por ejemplo, ha tenido en cuenta las cuestiones sociales y medioambientales relacionadas con el libre comercio en América, pero ha resultado ser un modelo insuficiente para reglamentar la estrategia empresarial de las corporaciones transnacionales. En vez de regular el comportamiento de una empresa concreta, el NAFTA regula exclusivamente la actuación del Gobierno. Pero, muchos Gobiernos, como el de México, tienen pocas estructuras de regulación, o carecen de ellas, y las corporaciones transnacionales se aprovechan de esta situación para su expansión.

Con la globalización en auge, se introdujo un cambio importante en la legislación mexicana en materia agrícola a fin de permitir el aumento de la inversión extranjera. La tierra indígena y comunal, los *ejidos*, se perdió como propiedad privada y así la inversión extranjera pudo disponer de más tierras. Esos grupos campesinos e indígenas se vieron obligados a desprenderse de sus raíces, a buscar una nueva tierra o nuevos trabajos muy mal pagados y en condiciones laborales penosas. El subcomandante Marcos, líder del EZLN, afirmó en una entrevista: "En el mundo moderno la única forma de valorar a una persona es por su poder adquisitivo o por su capacidad crediticia. Es preciso hacer referencia a la historia para saber qué es lo que hace a un ser humano, o a su dignidad, como decimos en el EZLN, sin convertirlo en un mero consumidor o productor, ni en un número más que figure en los índices de las estadísticas de las corporaciones multinacionales".<sup>6</sup> Los trabajadores mal pagados, los campesinos y los grupos indígenas son los que sufren las consecuencias de la nueva economía global.

La demanda del EZLN es, en esencia, la lucha por la democracia en México. Su acceso a la tierra, la vivienda, la alimentación, la educación y la libertad sólo se conseguirá si cuentan con una representación adecuada y una voz que intervenga con fuerza en la política de la nación. Desean un cambio en el régimen político existente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lleva tanto tiempo en el poder y que durante casi siete décadas ha sido mayoría en el Gobierno. El régimen no ha hecho nada por mejorar la situación de las poblaciones marginadas de Chiapas y México; lo que en realidad ha logrado es que a esos grupos les sea más difícil conseguir un cambio positivo. Mediante la violencia, la intimidación y el soborno, y gracias a las tropas que el Gobierno ha situado en los bastiones zapatistas y en las comunidades indígenas autónomas, el fraude electoral campa por sus respetos en Chiapas.

<sup>5</sup> Andrew Reading, *World Policy Journal*, vol. XIV, nº3, 1997, p. 12-13.

<sup>6</sup> Norm Diamond, "Chiapas: Forshadowing a Massacre", *New Politics*, nº 27, verano 1999, pp. 125-127.

Desde la rebelión de 1994, el apoyo al EZLN ha crecido a pasos agigantados, y, sin embargo, después de cada periodo electoral, una vez efectuado el recuento de votos, el Estado de Chiapas aparecía misteriosamente como partidario del PRI. Es muy difícil aceptar la transparencia de estos resultados después de examinar una reciente encuesta realizada por la Fundación Rosenblueth, con sede en Ciudad de México. El 73% de la población de México cree que las poblaciones indígenas tenían razones legítimas para rebelarse en 1994, el 68% cree que el Gobierno no ha hecho nada aún por mejorar la situación de los pueblos indígenas, y el 57% afirma que el Gobierno no ha hecho todo lo posible por conseguir la paz.<sup>7</sup> ¿Cómo se puede justificar, salvo por la falta de democracia, el apoyo que consigue el PRI en Chiapas? En palabras de Luis Hernández Navarro, editor de *La Jornada*, diario de Ciudad de México, el conflicto de Chiapas y la lucha por la democracia “están entretreídos de tal forma que no existe la posibilidad real de resolver una sin resolver el otro”.<sup>8</sup> Los zapatistas así lo han reconocido y luchan para que el sistema electoral funcione limpiamente en Chiapas. Se han negado a votar, por temor al fraude electoral, pero han animado a sus partidarios a hacerlo siempre que crean que existen las condiciones adecuadas. Otros partidarios de los zapatistas han bloqueado los caminos, quemado las urnas e impedido la instalación de mesas electorales para que el resultado de las elecciones tuviera que ser anulado.

Los zapatistas, para lograr la democracia, se enfrentan a otro gran obstáculo: la oposición a sus comunidades autónomas. Las comunidades autónomas zapatistas —que les fueron garantizadas con la firma de los acuerdos de San Andrés— constituyen un componente básico de la lucha indígena por la democracia. No son sólo una respuesta a la corrupción e ineficacia de las autoridades del PRI, sino que son un signo de la red de apoyos, cada vez más amplia y extensa, que ha creado el EZLN. En 1997, treinta y un condados del Estado de Chiapas fueron declarados autónomos.<sup>9</sup> Cada día, sin embargo, las comunidades autónomas tienen que afrontar el antagonismo de los jefes del PRI y de los funcionarios del Gobierno. El PRI se niega a reconocer a los municipios autónomos, pese a que éstos hayan sido autorizados con la firma de miembros del partido. Han dividido a las comunidades en facciones pro zapatistas y pro PRI, comprando e incitando a los priistas con pagos del Gobierno (les ofrecen 2.000 dólares en incentivos de crédito para que cultiven chile que luego pueden vender a las plantas procesadoras de la ciudad); una clara amenaza contra el sistema democrático por el que está trabajando tan duramente el EZLN. En la ciudad de Ibarra, los helicópteros del ejército llevan arroz, judías, azúcar y aceite para los priistas. En otras regiones, ingenieros del Gobierno ofrecen paneles solares y acceso al agua potable a los partidarios del PRI.<sup>10</sup>

*El 73% de la  
población de  
México cree  
que las  
poblaciones  
indígenas  
tenían  
razones  
legítimas  
para  
rebelarse en  
1994.*

<sup>7</sup> Luis Hernández Navarro, “Mexico’s Secret War”, *NACLA Report on the Americas*, Vol. XXXII, N° 6, mayo-junio 1999, p. 7.

<sup>8</sup> *Ibidem.*, p.7.

<sup>9</sup> Alejandro Nadal, “Terror en Chiapas”, *The Bulletin of Atomic Scientists*, Vol. 54, N° 2, Marzo-Abril, 1998, p. 24.

<sup>10</sup> Richard Stahler-Sholk, “The Lessons of Acteal”, *NACLA Report of the Americas*, Vol. XXXI, N° 5, Marzo-Abril 1998, p. 13-14.

*El Gobierno mexicano, por lo que parece, es célebre por pasar por alto los acuerdos firmados por sus propios equipos.*

Los zapatistas, sin embargo, se mantienen firmes en sus ideales, defienden sus comunidades autónomas y se niegan a ser comprados por el PRI. Los intentos del Gobierno de granjearse los con dinero han sido metódicamente rechazados. Los zapatistas están orgullosos de su sistema de justicia y democracia, que han creado y con el que, dadas las circunstancias, se ven obligados a competir. Plantean un reto importante a la hegemonía del PRI a través de sus propios programas de desarrollo, y no perdonan los sobornos. Se ha comprobado que con algunos programas, como los de cultivos colectivos, construcción de infraestructuras locales, creación de sistemas de regadío, salud y educación, o puesta en marcha de pequeñas empresas, se ha conseguido mejorar las condiciones de vida de los campesinos e indios y que aumentaran así las lealtades al EZLN.<sup>11</sup>

### **La posición del Gobierno**

Para el Gobierno mexicano el conflicto ha significado una pesada carga de la que le gustaría librarse con rapidez. Pero el problema, en vez de disminuir, se ha ido agravando con los años y es consciente de que no será fácil quitarse esa carga de encima. Su estrategia para resolver la situación es tajante: dismantelar y desarmar a los zapatistas y, a la vez, evitar una reestructuración interna. Si bien el Presidente Zedillo y otros miembros de su gabinete manifiestan que sólo a través del diálogo y las negociaciones se puede alcanzar la paz, sus actos les desmienten. En realidad prefieren la solución militar, como se pone de manifiesto en varios hechos: no cumplen la "Ley para la paz en Chiapas", ni los acuerdos de San Andrés; hay una escalada del ejército y de las fuerzas de seguridad en Chiapas; apoyan clandestinamente a los grupos paramilitares y, más recientemente, han disuelto los organismos mediadores que se dedicaban a impulsar las negociaciones de paz.

El Gobierno mexicano, por lo que parece, es célebre por pasar por alto los acuerdos firmados por sus propios equipos. Después de haber declarado un alto el fuego unilateral, en febrero de 1995 procedió a lanzar una ofensiva militar, fracasada, con la idea de procesar y capturar al cabecilla de los zapatistas. El ejército avanzó sobre varios municipios, antes controlados por los zapatistas, buscando y deteniendo a personas sospechosas de ser miembros del EZLN. Aunque no hubo ningún conflicto armado, los mexicanos en general se opusieron de forma tajante a estas acciones y presionaron al Gobierno para que abriera nuevas negociaciones. En marzo de 1995, se acordó la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y una Paz Digna en Chiapas", que reconocía al EZLN como "grupo de ciudadanos mexicanos en su mayoría indígenas, que expresaron su no conformidad el 1 de enero de 1994 con un movimiento armado".<sup>12</sup> Esta ley, tal como estaba concebida, impedía que hubiera procedimientos penales y reconocía que la insurrección estaba motivada por causas justas. Además, exigía que se pusiera fin al despliegue de tropas y que se creara la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)

<sup>11</sup> Ibidem., p. 14.

<sup>12</sup> Nadal, *The Bulletin of Atomic Scientists*, Marzo-Abril, 1998, p. 25.



para facilitar las negociaciones posteriores entre el Gobierno y los rebeldes zapatistas.

Se reiniciaron nuevas conversaciones con un plan para afrontar en primer lugar, los derechos de los indígenas, en segundo lugar, la justicia y democracia y, por último, el desarrollo económico.<sup>13</sup> En la primera ronda de conversaciones se logró llegar a la firma de los Acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996, y garantizar a los indígenas el derecho a tener comunidades autónomas, gobernadas por la ley indígena, incluidas dentro del marco de la Constitución. Cuando el diálogo de San Andrés prosiguió en marzo con los temas de discusión pendientes, era ya evidente que el Gobierno no estaba dispuesto a cumplir lo acordado. La presencia militar se hizo más fuerte en Chiapas. En la segunda ronda de conversaciones, cada reunión coincidió con actos de violencia contra los simpatizantes del ELZN, con muertes violentas cada semana.<sup>14</sup> Los zapatistas, que ya no querían continuar con unas negociaciones que consideraban inútiles, declararon la suspensión de las mismas hasta que se detuviera la violencia y se pusiera fin a la creciente presencia militar.

Desde que se establecieron 12.000 efectivos en Chiapas después de la rebelión de 1994, el envío de tropas al conflictivo Estado había ido aumentando a niveles sin precedentes. Aunque el Gobierno negaba que en Chiapas hubiera un estado de guerra, los militares habían ocupado, con 60.000 soldados, las zonas más estratégicas de 66 de los 111 municipios de Chiapas. El Gobierno dio todo tipo de excusas para explicar la escalada de tropas, pretendiendo así conservar una buena imagen política. Años antes, el pretexto era la “lucha contra las drogas”. En esta ocasión, el elevado número de soldados en Chiapas, se justificó por la necesidad de poner fin a la violencia entre los grupos indígenas y de controlar el “salvajismo” de los indios.<sup>15</sup> A las afirmaciones del Gobierno hay que añadir las del ejército, para quien la creciente militarización era la respuesta a los movimientos de los zapatistas. Sin embargo, la cronología de los movimientos estratégicos de los dos grupos no coincide. Irónicamente, mientras el Gobierno intenta justificar la presencia militar en Chiapas con excusas para mantener cierta imagen política, parece ignorar que esta presencia y su conducta resultan una clara violación de la Constitución Mexicana y de la Ley para la Paz en Chiapas. Según los artículos 29 y 129, cualquier interferencia militar en un Estado debe ir precedida por una declaración del Congreso de poderes de crisis. Tal declaración no ha existido y, sin embargo, el ejército ha entrado en las comunidades y en los hogares para efectuar registros sin autorización; ha realizado controles militares en las carreteras civiles y comunidades zapatistas; y ha instalado bases permanentes en las comunidades zapatistas o cerca de ellas.<sup>16</sup>

Además de este aumento de tropas, Chiapas ha vivido la escalada de los grupos paramilitares. Hoy, operan al menos nueve grupos paramilitares en 27 de los

<sup>13</sup> *Ibidem.*, p. 20

<sup>14</sup> *Ibidem.*, p. 20

<sup>15</sup> Stahler-Sholk, *NACLA Report of the Americas*, 1998, p. 10

<sup>16</sup> Nadal, *The Bulletin of Atomic Scientists*, pp. 23-24

111 municipios, y son responsables de la intimidación y el asesinato de muchos simpatizantes zapatistas.<sup>17</sup> En diciembre de 1997 hubo 6.120 refugiados en la región septentrional de Chiapas, y en el área de Chenalhó su número llegó a 9.207.<sup>18</sup> Para el Gobierno, el empleo de fuerzas paramilitares es el punto central de su estrategia anti-insurrección para derrotar a los zapatistas y, por ello ha favorecido, de forma encubierta, el crecimiento de estos grupos. En 1995, entraron en el norte de Chiapas los dos primeros grupos paramilitares: Paz y Justicia y Los Chinchulines. Primero operaron en las comunidades de Tila, Tumbal y Sabanilla. En 1996 y 1997 empezaron a secundarlos otros grupos –el grupo Tomás Munster, el Movimiento Indígena Revolucionario Anti-Zapatista, la Máscara Roja, las Fuerzas Armadas del Pueblo y otros. Según los testimonios, más de 60 comunidades sufrieron hostigamiento, hurtos, tiroteos e incendios de parte de los paramilitares.<sup>19</sup>

El más espeluznante de estos crímenes ocurrió el 22 de diciembre de 1997 en la aldea de Acteal. Allí fueron masacrados brutalmente 45 indios tzotzil mientras oraban por la paz en la capilla provisional del campo de refugiados de la aldea. Entre las 45 víctimas figuraban 21 mujeres y 15 niños; hubo, además, 25 personas con heridas graves. El relato de los supervivientes se asemeja a una pesadilla. Sesenta paramilitares armados, vestidos de negro, rodearon la iglesia como sombras. “Abrieron fuego y luego persiguieron a los de la aldea que huían, clavándoles los machetes y mutilándolos con ellos durante las cinco horas que siguieron. Los asaltantes, arrancaron los fetos del útero de las mujeres embarazadas –táctica de los temibles ‘Kaibiles’ de Guatemala”<sup>20</sup>. La mayoría de las víctimas eran miembros de un grupo llamado Las Abejas, que se entregaron a la causa zapatista contra los “jefes políticos semif feudales” del estado de Chiapas.<sup>21</sup> Para mayor ironía, Las Abejas, que están en contra del empleo de todo tipo de armas en su búsqueda por la transformación de la vida política y por la justicia social, fueron asesinados a tiros en una reunión religiosa.

Aunque no se ha tenido pleno conocimiento de la actuación de grupos paramilitares en Chiapas hasta hace unos cuatro años, hace ya mucho tiempo que éstos actúan en la región. Los ricos terratenientes y propietarios de ganado solían contratar a hombres de fuera de las comunidades locales para que protegieran sus tierras e intereses. Ahora, sin embargo, estos nuevos paramilitares son jóvenes contratados en las propias comunidades indígenas y campesinas en las que actúan. Para el periodista y escritor Norm Diamond, los paramilitares constituyen un nuevo tipo de agrupación social que surge como consecuencia directa del capital internacional, o de la globalización de la economía mundial. En este caso, las mismas fuerzas que explican la rebelión, explican el reclutamiento de paramilitares. En las comunidades chiapanecas hay muchos jóvenes frustrados porque no

<sup>17</sup> Navarro, *NACLA Report on the Americas*, 1999, p. 7.

<sup>18</sup> Nadal, *The Bulletin of Atomic Scientists*, p. 21.

<sup>19</sup> *Ibidem.*, p. 21.

<sup>20</sup> Stahler-Sholk, *NACLA Report of the Americas*, 1998, p.11.

<sup>21</sup> *Ibidem.*, p. 8.



tienen tierra ni trabajo. Algunos se quedaron allí cuando sus padres emigraron para buscar trabajo y muchos están casados con hijos. Como los ejidos ya no existen, estos hombres no han tenido la oportunidad de conocer el trabajo comunal, la responsabilidad o las decisiones tomadas colectivamente.<sup>22</sup> Unirse a un grupo paramilitar les ofrece una solución rápida a su situación económica. El grupo les proporciona unos ingresos fijos, y les confiere un prestigio y un poder que nunca podrían alcanzar como simples campesinos sin trabajo ni tierras.<sup>23</sup>

La guerra paramilitar es una táctica oscura y canalla, que hace posible controlar e intimidar a las poblaciones, sin sufrir las repercusiones políticas que habría si el Gobierno, como tal, se dedicara a organizar este tipo de represión. No sólo libran al ejército de la tarea de aterrorizar a las comunidades chiapanecas, sino que, además, el Gobierno puede usar a los paramilitares como chivo expiatorio ante la atención internacional. Además, el Gobierno mejicano necesita transmitir una imagen de “legitimidad y estabilidad” para mantener el flujo de inversiones extranjeras. Los paramilitares son el perfecto mecanismo de “negativa creíble”.<sup>24</sup> El Gobierno niega tener la menor relación con los paramilitares, y afirma que su creación y entrenamiento empezó con la policía estatal. Recientes estudios sobre estos grupos han puesto al descubierto una serie de evidencias que prueban que las afirmaciones de inocencia del Gobierno no son ciertas. El hecho de que los paramilitares porten armamento de tipo militar demuestra que han tenido algún tipo de vinculación con el ejército regular. Además, se ha descubierto que “por pura coincidencia”, justo unas semanas antes de la matanza de Acteal, el grupo paramilitar más conocido por su violencia –llamado, irónicamente Paz y Justicia– recibió un donativo de 575.000 dólares de Julio Cesar Ruiz Fierro, gobernador de Chiapas.<sup>25</sup>

## **Posición de la Iglesia**

Aunque el conflicto de Chiapas está centrado en las tensiones entre el Gobierno y el EZLN, existe otro importante actor en este intenso drama: la Iglesia católica. El apoyo a los zapatistas en las diócesis católicas no es unánime. De hecho, según Saúl Landau, especialista y analista político, gran parte de la Iglesia católica no está totalmente de acuerdo con la misión del EZLN. Gran parte del clero está en contra del uso de las armas y otra parte desea permanecer neutral y no tomar partido en el conflicto. Landau subraya, sin embargo, que, pese a la tensión existente entre los católicos, “la religión no es la mayor fuente de conflictos”,<sup>26</sup> aunque ha ayudado a provocar divisiones en el seno de la comunidad. A menudo los caciques de la aldea recurren a la religión para expulsar a los partidarios del ELZN.

*Gran parte  
del clero está  
en contra del  
uso de las  
armas y otra  
parte desea  
permanecer  
neutral y no  
tomar partido  
en el conflicto.*

<sup>22</sup> Diamond, *New Politics*, p. 127.

<sup>23</sup> Andrés Aubry y Angélica Inda, “Who are the Paramilitaries in Chiapas?”, *NACLA Report of the Americas*, Vol XXXI, N° 5, Marzo-Abril, 1998, pp. 8-9.

<sup>24</sup> *NACLA Report on the Americas*, 1998, p. 6.

<sup>25</sup> Karen Kampwirth, “Peace Talks, But Not Peace”, *NACLA Report of Americas*, Vol XXXI, N° 5, Marzo-Abril, 1998, p. 18.

<sup>26</sup> Saúl Landau, entrevista personal por correo electrónico, 8 de junio de 1999.

Con la prohibición zapatista sobre el consumo de alcohol en las aldeas, los caciques –jefecillos rurales tradicionalmente en connivencia con el partido gobernante y que casi siempre tienen el monopolio de la bebida– utilizan el ritual religioso como pretexto para expulsar a los zapatistas por no beber, tachándolos de “herejes”.<sup>27</sup> Existen también grupos de “católicos tradicionales” que viven en pequeñas comunidades en las montañas que mantienen relaciones estrechas con el PRI de Chiapas. Estos grupos recurren a menudo a la violencia contra cualquier grupo o movimiento que amenace su poder.<sup>28</sup>

Sin embargo, hay algunas diócesis que, históricamente, han proporcionado una red de programas de apoyo a los indígenas marginados y a las comunidades campesinas. Aunque la religión no sea la principal fuente de conflictos, es indudable que ha jugado un papel esencial al armar a los indígenas y a la población campesina con el conocimiento de sus derechos, y con el deseo de efectuar cambios en su situación social y política. La diócesis de San Cristóbal de las Casas, a cuyo frente está el obispo Samuel Ruiz, ha sido una importante aliada de las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas desde que Ruiz fue nombrado obispo en 1960. Para él, es responsabilidad de los cristianos poner los recursos y la ayuda de la Iglesia al servicio de los pueblos indígenas. La Iglesia preparó a trabajadores pastorales –sacerdotes, religiosos y religiosas y catequistas laicos– que empezaron a organizar proyectos de desarrollo agrícola colectivo, como campos comunitarios de cereales y café y huertos. Además, defendían la cultura y las tradiciones indígenas, intentando conservarlas. Como “delegados de la palabra” aprendieron las lenguas nativas y La Biblia fue traducida del español a las lenguas lacandonas locales.<sup>29</sup> Cuando en los años setenta llegaron a la región de Las Cañadas unos activistas políticos para promover una “unión de uniones” entre las estructuras campesinas colectivas, el obispo Ruiz les dio abiertamente la bienvenida para que continuaran su trabajo en las comunidades adscritas a la Iglesia.<sup>30</sup>

Al movilizar a las comunidades indígenas para desarrollar un trabajo conjunto, al promover la igualdad de género y al recordarles su historia cultural con la tierra de México, se empezó a crear un *esprit de corps* entre los asentamientos de la selva Lacandona. En palabras del especialista David Bastone, “el dicho maya de que ninguna persona debe estar por encima de otra, el objetivo de la Iglesia de dar el mismo poder a todos los miembros de la comunidad y la creencia de los organizadores políticos en las movilizaciones sociales, son elementos que se combinan para crear una cultura revolucionaria dinámica”.<sup>31</sup> En 1974, los indios tuvieron la oportunidad de expresar verbalmente este espíritu y esta cultura cuando el gobernador del estado, Manuel Velasco Suárez, pidió al obispo Ruiz que participara en la preparación de un Congreso Indígena. En aquel momento, la

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Fred Rosen, entrevista personal por correo electrónico, 6 de julio de 1999.

<sup>29</sup> David Bastone, “Strategic Religious Organizing”, *Peace Review*, Vol. 7, Nº 1, 1995, pp. 88-89.

<sup>30</sup> Ibidem., p. 89.

<sup>31</sup> Ibidem., p. 89.

Iglesia católica estaba ya lo suficientemente instalada, gracias a sus programas de desarrollo comunitario y a su labor evangelizadora, para empezar a organizar delegaciones procedentes de las distintas regiones indígenas. El congreso se celebró, en parte, para crear una imagen más populista del Gobierno, que intentaba recuperar su reputación dañada tras la brutal represión del movimiento estudiantil de 1968. El Gobierno consideraba que el congreso le permitiría organizar a nuevos líderes indígenas en una coalición o alianza populista promovida por él mismo, pero se equivocó. Todas las reivindicaciones expuestas en las sesiones del congreso fueron demandas contra la ambigüedad de la ley, y la arbitrariedad y corrupción de las organizaciones gubernamentales que supuestamente estaban para ayudar a las culturas indígenas. Reclamaban la reforma de la tierra, el respeto a sus culturas y derechos, y pedían que el Congreso Indígena se celebrara con total independencia del partido en el poder. En palabras de Samuel Ruiz, “el Congreso será de y para los indios.”<sup>32</sup> No es difícil comprender por qué los ricos ganaderos y terratenientes de Chiapas llevan tiempo acusando al Obispo Ruiz de alimentar el descontento de campesinos e indígenas.

En la actualidad, el Obispo Ruiz y la Iglesia son piezas clave en el conflicto de Chiapas, pues ponen en marcha muchos programas de carácter público y, lo que es más importante, desempeñan un papel como intermediarios en la crisis y en los conflictos comunitarios. Además, el obispo Ruiz ha sido la cabeza visible de la mediación en las negociaciones celebradas entre los jefes del EZLN y los funcionarios gubernamentales en la Comisión de Mediación (CONAI). Aunque el obispo tiene un amplio respaldo, Saúl Landau afirma que es importante tener en cuenta que “la Iglesia no está automáticamente identificada con él”.<sup>33</sup> El propio Ruiz subraya: “En atención a la representación, me gustaría decir que la Iglesia no es el obispo. Está constituida por los cristianos. Su afirmación de que la Iglesia ha jugado un papel importante es cierta, porque hay cristianos que son muy activos en el proceso de cambio social y reconciliación. Los cristianos han participado, por ejemplo, en promover el diálogo entre las comunidades indígenas y dentro de ellas, muchas de las cuales están siendo hostigadas desde fuera”.<sup>34</sup>

Precisamente porque la Iglesia católica no se identifica de forma automática con el obispo Ruiz, CONAI no debe ser identificada de forma automática con la Iglesia. Oficialmente, la Comisión de Mediación no está ligada con lo católico, pero el hecho de que esté a su frente el obispo Ruiz da pie para que muchos piensen que CONAI representa a la Iglesia mexicana. CONAI no representa a ninguna de las partes en conflicto. La Comisión es independiente y toma parte activa cuando las negociaciones se abren y cuando hay que establecer una comunicación previa a las mismas. Facilita el intercambio de información y respuestas entre las partes a fin de que tengan pleno conocimiento de cómo está la situación y de cuáles son los temas a debatir.<sup>35</sup> Desde su creación, sin embargo, el Gobierno ha atacado su credibilidad como

<sup>32</sup> Neil Harvey, *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*, Duke University Press, Durham, 1988, p. 78.

<sup>33</sup> Saúl Landau, entrevista personal por correo electrónico, 8 de junio de 1999.

<sup>34</sup> Rosen, *NACLA Report of the Americas*, 1997, p. 39.

<sup>35</sup> *Ibidem.*, p. 42.

organismo mediador hasta tal punto que, en 1998, obligó a CONAI a autodisolverse. Con esta acción, el Gobierno dificulta la solución del conflicto en un futuro próximo, y se refuerza la posibilidad de una mediación internacional.

## Conclusiones

Chiapas es una tierra cargada de desesperación y se puede pensar que los ciudadanos de esta región hayan sido privados de la posibilidad de un futuro mejor. Sin embargo, cuando el ejército zapatista tomó por asalto seis poblaciones de Chiapas, prendió una llama de esperanza para todas las poblaciones excluidas. En palabras de John Holloway y Eloína Peláez, “la insurrección zapatista abre un mundo que parecía estar cerrado, da vida a una esperanza que parecía estar muerta”.<sup>36</sup> Es un hecho esencial, que arroja una luz diferente a la rebelión de los zapatistas, y subraya su fuerza de espíritu y la entrega a su causa. Ellos irrumpieron en la escena internacional justo cuando el fracaso de las viejas revoluciones de este siglo había engendrado un pesimismo universal y una falta de fe en los movimientos que luchan por el cambio social. Los zapatistas creen que la identidad, las tradiciones y la cultura no son las víctimas sin esperanzas del neoliberalismo. Por el contrario, han creado un ideal según el cual su mundo puede coexistir con el actual, donde es posible comunicarse, escuchar y ser escuchado.

¿Cuál es la diferencia de esta visión idealista respecto a la de los grupos guerrilleros que la precedieron? La rebelión zapatista no preconiza la toma del poder del Estado por medios violentos para afirmar así su identidad. Tampoco pretende derribar la democracia burguesa e instaurar una especie de dictadura del proletariado.<sup>37</sup> Los zapatistas no quieren el poder, no quieren tampoco establecer separaciones entre ellos al pedir que sus identidades sean reconocidas. El concepto de poder es fundamental para entender aquello contra lo que están luchando. Piensan que defender su identidad pasada sería como vivir en el pasado. Ahora miran al futuro y luchan por construir –mediante la conquista de libertad, justicia y democracia– un ideal de mundos que coexistan. Como afirman Holloway y Peláez, “esto marca una ruptura radical con las tradiciones de la izquierda revolucionaria y no revolucionaria [...] el hecho de que una organización revolucionaria como el EZLN diga que no está luchando para conquistar el poder, sino para abolirlo, hace que sean muy normales y por tanto muy extraordinarios.”<sup>38</sup>

8 de julio de 1999 - Investigación realizada en el Centro de Investigaciones para la Paz, Madrid. Mi mayor agradecimiento a todo el equipo del CIP, especialmente a Mariano Aguirre, Sandra Gil, Virginia Montañés, Angela Sobrino, Susana Fernández, Belén Drona; y también a Lucy Conger, Saul Landau, Fred Rosen y Roger Burbach.

<sup>36</sup> John Holloway y Eloína Peláez, “Introduction: Reinventing Revolution”, *Zapatista! Reinventing Revolution in Mexico*, Pluto Press, Londres, 1998, p. 1.

<sup>37</sup> Luis Lorenzano: “Recomposition of Labour, Radical Democracy and Revolutionary Project”, *Zapatista! Reinventing Revolution in Mexico*, Pluto Press, Londres, 1998, p. 155.

<sup>38</sup> Holloway y Peláez, *Zapatista! Reinventing Revolution in Mexico*, pp. 3-5.